

DEMOCRACIAS DE BAJA INTENSIDAD: AMERICA LATINA EN LA EPOCA POSDICTATORIAL

Dirk Kruijt

De la Universidad de Utrecht

las batallas de los soldados profesionales en América Latina se han realizado durante décadas casi exclusivamente en "guerras internas" o en "conflictos irregulares": contra adversarios "subversivos" y "terroristas" como bandas guerrilleras o campesinos insurgentes.

Políticos Militares, Proyectos Militares y Escuelas Cívico-Militares

América Latina vive con el legado de los años setenta del siglo pasado. En el contexto de la Guerra Fría y acompañados por ideologías de Seguridad Nacional surgieron regímenes militares o cívico-militares de tinte represivo y autoritario en una serie de países: la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay y el Perú. Hasta Uruguay, país ejemplar de democracia, gobierno cívico y seguridad social durante la mayor parte del siglo veinte, fue derrumbada por el aluvión de gobiernos controlados por los militares. En Cuba y Nicaragua se instalaron regímenes político-militares de ideología socialista, que en la práctica optaron por excluir el voto de partidos políticos y actores sociales que operaban fuera del ámbito del partido único en el poder.

Regímenes militares no fueron los únicos para contribuir a la formación de sociedades mutiladas por la angustia y el horror. Durante los últimas cuatro décadas, el continente se veía afectado por un ciclo generalizado de violencia, implementada por diferentes "actores armados": desde las

Fuerzas Armadas hasta la guerrilla, desde los paramilitares hasta las mafias del narcotráfico, desde las comités de autodefensa hasta los criminales "comunes". Sin embargo, de todos esos actores, fueron las Fuerzas Armadas quienes desempeñaron el papel preponderante en la constitución de "sociedades de miedo", donde reinaba el terror en vez de la justicia, la tortura en vez del convencimiento, y el fusil en vez de la pluma.. [\[1\]](#)

Es singular que durante todo el siglo veinte las Fuerzas Armadas en América Latina casi nunca llegaron a encontrarse con fuerzas externas en guerras regulares. En contrario: la guerra del Chacó entre Bolivia y Paraguay, la guerra entre El Salvador y Honduras y tal vez la guerra de las Malvinas son los tres únicos ejemplos de guerras regulares en el sentido propio. Los demás enfrentamientos eran a lo mejor conflictos limitados, choques fronterizos o campañas insignificantes. Efectivamente, los países latinoamericanos no tienen enemigos en el sentido de Estados agresivos y conquistadores. Al comienzo del siglo veinte y uno, nadie pensará seriamente en guerras de larga escala entre, por ejemplo, el Brasil y Paraguay, la Argentina y Chile, México y Guatemala. En contrario, las batallas de los soldados profesionales en América Latina se han realizado durante décadas casi exclusivamente en "guerras internas" o en "conflictos irregulares": contra adversarios "subversivos" y "terroristas" como bandas guerrilleras o campesinos insurgentes.

Efectivamente, el significado verdadero de las Fuerzas Armadas latinoamericanas se halla en su naturaleza política. América Latina es el continente de los soldados políticos y de los políticos militares. Durante los últimos doscientos años una carrera militar ha sido el camino más seguro para llegar a la presidencia de la república en países tan variados como la Argentina, Bolivia, el Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Paraguay e el Perú. El significado real de las Fuerzas

Armadas en América Latina es su peso político. Como "fuerza estabilizador", como "arbitro desinteresado", como "potencia protector de la Constitución", como "vigilante del desarrollo nacional"etc., los estamentos militares sabían intervenir en asuntos políticos con inmunidad e impunidad. En esta capacidad interventora, los militares ejecutaron "misiones estabilizadoras" dentro de la arena política. De tal modo, fueron diseñadores y ejecutores de "proyectos militares" dentro de sus respectivos países. Generales fueron políticos en uniforme, más de que líderes de soldados..

El concepto de las Fuerzas Armadas como "instituciones estabilizadoras" llega a dos diferentes inclinaciones: una que llega a gobiernos de carácter reformista - dictablandas - y otra que acaba en represión dura. Los gobiernos de los generales Calles y Cárdenas en México, el tenentismo y el Varguismo en el Brasil, el gobierno peronista en la Argentina, el Velasquismo en el Perú y el Torrijismo en Panamá son ejemplos de gobiernos militares reformistas. Las dictaduras cívico-militares del Cono Sur en los años setenta y los gobiernos militares y cívico-militares durante las guerras civiles de América Central son ejemplos de gobiernos militares con violencia y represión abierta, basada en sus doctrinas de "seguridad nacional" y de "estabilidad nacional". [\[2\]](#)

Elemento esencial dentro de estas tesis de "seguridad nacional" y de "estabilidad nacional"era la ponencia dogmática que las Fuerzas Armadas, por la ausencia de cualquier otro bloque de alianzas estables dentro de la sociedad civil, tenía la tarea legítima e inalienable de guiar el desarrollo nacional. En hecho, el "desarrollo de la nación"era la columna vertebral de los "proyectos nacionales", proyectos militares concebidos con su mística propia y profunda. Hayes, analista de la ideología militar brasileña, proporciona el siguiente cuadro lúcido: [\[3\]](#)

"Como generalmente es bien sabido, los líderes militares brasileños produjeron al final un plan comprensivo para gobernar al Brasil, conocido como proyecto militar o el proyecto nacional (...). En esencia, el proyecto militar es el esfuerzo más maduro hasta la fecha de implementar los ideales de la mística corporativa militar como fue representada en los conceptos como el de la nación armada y el mesías militar o el estadista militar, que tiene raíces que se puede trazar en la historia brasileña (...). La doctrina básica formulada por los militares brasileños era de la seguridad y de desarrollo nacional (...). considerada por los líderes militares como elemento aglutinante para la sociedad (...). Como ellos estimaron, militares producirían de tal modo que desarrollo se realizaría, aunque también veían la posibilidad de brindar al Estado un papel en la economía "para llenar los espacios vacíos" dejados por los esfuerzos ineficientes del empresariado brasileño. Utilizando las Fuerzas Armadas como modelo de una institución total, dedujeron que "los principios de la organización militar deberían dirigir la reorganización nacional" (...). Los líderes militares necesitarían la implementación de principios militares de organización "para disciplinar la sociedad civil" (...), con las Fuerzas Armadas sirviendo como institución para "adaptar, corregir y moldear la ciudadanía". También considerado necesario en el plan militar de juego en el período post-1964 era la creación de una nueva élite política y administrativa. Para este objetivo los oficiales militares asumirían el papel de cruzados político-educativos quienes cambiarían el estilo de la clase política civil y de las instituciones parlamentarias" (traducción mía, cursiva en original).

El ejemplo brasileño demuestra como la relación de la élite militar frente a la nación puede llegar a la legitimación de largas intervenciones, hasta para la reconstrucción nacional. El sentido de la superioridad de los militares y de las dictaduras

cívico-militares del reciente pasado fue "explicado" y previsto de argumentación por "intelectuales militares", oficiales militares en funciones claves dentro de las áreas sensitivas de personal, presupuesto, logística y sobre todo de inteligencia y de programas de entrenamiento para coroneles y generales. Es aquí que se desarrollaron las diferentes tesis de seguridad nacional y doctrinas sobre el destino deseado de la nación y el papel privilegiado prescrito para las Fuerzas Armadas. En su capacidad auto-proclamada de terapeuta de traumas nacionales y de guardianes naturales de la nación, el sentido de superioridad moral se cultivó fuera de y separado de la sociedad de ciudadanos. Últimamente tocaba a los líderes militares de desempeñar el papel de encabezar una misión sagrada, de salvar la nación de las actividades derrumbantes del "caos cívico" por medio de la reconstrucción del orden económico, social y político. Mucho de la actuación de los gobiernos cívico-militares de la Argentina, del Brasil, de Chile, de Guatemala etc. puede ser analizada por los políticos en uniforme en su afán de llevar a cabo un "proyecto nacional" dentro del cual las Fuerzas Armadas actuaron como "cuasi-partido". [4] En el Brasil, en Chile, pero también en la Argentina y Guatemala, las Fuerzas Armadas no eran la única fuerza política. Sin embargo, actuaron como el actor imprescindible dentro de un conjunto de sectores aliados y asociaciones de empresarios. En aquellos países, la "derecha fuerte" transfirió el liderazgo político en manos de militares, organizados como tal dentro de la sociedad política.. [5]

Schirmer, analista de los proyectos militares en Guatemala tipifica la actitud de superioridad moral y de la misión educativa como "fundamentalismo militar". [6] "Educación ética" proveería criterios democráticos a los soldados que, guiados por los valores éticos de las doctrinas militares "por lo menos sabrían quienes y por qué mataron". Oficiales así entrenados

actuarían de tal modo como la "reserva ética de la nación". La lenta sintonización de las Fuerzas Armadas con el proceso democrático en Guatemala coincidía - como también opinan Arévalo y Rosada-Granados[7] -con la modernización del proyecto nacional militar: la transferencia controlada hacia una "democracia blindada" auspiciada por las Fuerzas Armadas. No es asombroso que los estamentos militares guatemaltecos abrieron, a finales de la década de los ochenta, el Centro ESTNA.[8] Fue creado por el entonces ministro de la Defensa Nacional, el general Héctor Gramajo, autor de la "tesis de estabilidad nacional", para entrenar cuadros militares y civiles en la correcta "interpretación de la realidad nacional". El Centro ESTNA trató de cultivar explícitamente una nueva élite civil y militar: oficiales de inteligencia, asesores del presidente, miembros del Congreso nacional, embajadores, representantes del sindicalismo laboral, líderes religiosos, representantes de los pueblos Maya, y periodistas. Tampoco es asombroso que en dos otros países con una marcada presencia castrense en gobiernos cívico-militares, el Brasil y el Perú, también fueron creados centros de altos estudios cívico-militares, donde intelectuales militares tenían la oportunidad de pensar, escribir y de entrenar nuevas generaciones de élites militares y burocráticos en el País. En el Perú, el CAEM[9] entrenó coroneles y generales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, y unos años después también a directores en el sector público y a asesores ministeriales en materia de las doctrinas militares y del desarrollo nacional. El tinte nacionalista, anti-oligárquico y anti-imperialista - también inspirado por los conceptos lanzados por la CEPAL - de los conceptos geopolíticos y de desarrollo, elaborados por un grupo reducido por oficiales de inteligencia, se ve directamente reflejado en el programa de gobierno de los Gobiernos Revolucionarios militares en los años sesenta y setenta. En el Brasil se desarrolló la base conceptual de las

tesis de seguridad nacional y las doctrinas de desarrollo nacional en la ESG [\[10\]](#), el centro de estudios geopolíticos para coroneles y generales, donde también representantes del sector público y privado recibían entrenamiento en estrategias militares y estrategias de desarrollo. De los cincuenta hasta los ochenta del siglo pasado, los alumnos - militares, tecnócratas y empresarios - recibían cursos en asuntos políticos, sociología y psicología, logística y movilización, inteligencia y seguridad, planificación de desarrollo y economía regional.

Presencia Militar y Democracias de Baja Intensidad

Durante el proceso de redemocratización en América Latina se ha lentamente disminuido tanto la popularidad como el significado político de las escuelas cívico-militares arriba mencionadas. Sin embargo, en los años noventa, cuando se consolidó el proceso dual del retiro de los gobiernos cívico-militares y del fortalecimiento democrático nacional, la presencia militar que se había manifestado anteriormente se demostró ahora en la forma de presencia de sombra, a través de "asesores militares obligatorios" y "enlaces cívico-militares" entre el sector público, el servicio de inteligencia y la comandancia general. Aunque los militares se retiraron oficialmente del escenario político, su presencia entre bastidores debería garantizar la prolongación ambigua de su influencia. En retrospectiva, parte de su prolongada presencia puede ser explicada por la vigilancia activa de los estamentos militares sobre el retiro institucional negociado. Otro factor explicativo ha sido, sin lugar a duda, el miedo de algunos ex-dictadores y sus compañeros de junta, de clase o de gobierno de tener que estar presente en un juicio posterior conducido por autoridades civiles que ellos de ningún modo podían controlar. El resultado en los países como la Argentina, el Brasil, Chile y Guatemala era tal que se produjo, por lo menos durante los años de transición, un tipo de democracia tutelada, una democracia de baja intensidad.

La presencia militar enmascarada podía continuar por el hábil uso de cuatro factores de poder: el control de los militares sobre el sistema de inteligencia, el predominio de los militares sobre las fuerzas policíacas, las tareas militares de desarrollo local en regiones remotas, y la base legal de inmunidad militar. De los cuatro factores, el control militar sobre la inteligencia militar es tal vez el más importante.

Las "guerras internas" y las "luchas contra el terrorismo interno" en América Latina coincidieron mayoritariamente con los gobiernos cívico-militares de mano dura. El instrumento de control por excelencia de esos gobiernos fue el conjunto de servicios paralelos: de inteligencia militar, de los cuerpos de seguridad del Estado, de los cuerpos policiales y parapoliciales, de los agrupamientos para-militares. Como cerebro y columna vertebral de la lucha contra-insurgente y contra-terrorista se expandió el sistema de inteligencia y de seguridad de tal modo que sus nexos oficiales y extra-oficiales fueron difícilmente distinguibles. Inteligencia militar y civil, casi siempre unificada bajo órdenes del ministerio de la Defensa, fueron dirigidos contra "enemigos internos" dentro del territorio nacional. Al momento que se llegó a diálogos con los enemigos internos como en Colombia, y a los acuerdos de la paz como en Centroamérica, se negoció más sobre el retiro de los gobiernos cívico-militares y la reducción de las Fuerzas Armadas que sobre la redimensionalización del sistema de inteligencia. [\[11\]](#) También en el caso del retiro de los gobierno cívico-militares represivos en el Cono Sur ocurrió lo mismo. Las consecuencias a mediano plazo han sido que los presidentes del Brasil, Chile y Guatemala después de la transferencia de los gobiernos de facto a gobiernos legitimados por elecciones, durante años quedaron los rehenes ideológicos de sus "asesores de inteligencia". Los primeros gobiernos pos-militares del Brasil, el primer presidente pos-Pinochet chileno y una cadena consecutiva de

presidentes civiles en Guatemala después de la transferencia hacia la democrática en 1985, se encontraron en una relación inconfortable con asesores impuestos en el área de seguridad y desarrollo nacional.

El predominio militar sobre las Fuerzas Policiales se expresa por nombramientos de (ex-)militares como jefe de cuerpos nacionales de policía, o de (ex-)generales como ministro de Gobierno o del Interior. Generalmente - como en Guatemala y Honduras hasta poco - la policía dependía del análisis de inteligencia militar y no tenía capacidad investigadora en asuntos criminales o forenses. Otra herencia de los regímenes de mano dura es la interrelación con cuerpos paramilitares, con los expertos en desestabilización y con escuadrones de la muerte. [\[12\]](#) Otro factor de permanencia en el poder es el hecho que en la mayoría de los países latinoamericanos las Fuerzas Armadas -generalmente el ejército pero a veces también la marina - actúan como el único representante del sector público y del Estado en regiones remotas y subdesarrolladas, con médicos y enfermeras militares, dentistas militares, veterinarios militares, ingenieros militares, abogados militares y administradores militares. La conexión entre funciones civiles y militares en áreas remotos y regiones deprimidas se refuerza por una misión militar "tradicional" de desarrollo local, de programas de "acción cívica", ejecutados por las Fuerzas Armadas para la población local, originalmente concebidas como instrumentos de prevención de guerrilla y de contra-insurgencia. [\[13\]](#)

Legislación especial y la fácil delegación de procesos jurídicos hacia la justicia militar favorece la práctica de inmunidad relativa en el Brasil, Colombia, .El Salvador, Honduras, el Perú y otros países. La costumbre de utilizar el sistema de "jueces sin rostro" y utilizando la legislación anti-subversiva en Colombia y en el Perú respalda la falta de miedo de militares en

materia de violaciones de derechos humanos. La existencia de cortes militares en materia puramente cívica enfatiza el relativo privilegio militar en términos de justicia común y corriente.

La presencia sentida de los militares en el contexto político contribuye directamente a la persistencia de democracias de baja intensidad. Son democracias con ciudadanos vigilados, con políticos asesorados y avisados, con legisladores tímidos, con jueces miedosos, con gobernantes desconfiados y con presidentes temerosos. Son democracias donde las instituciones democráticas (gobiernos civiles, partidos políticos, parlamento y justicia independiente) y la sociedad civil (gremios empresariales, el movimiento laboral, asociaciones populares, el circuito de las ONG) aparenta estar detenidas en un estado de "adolescencia permanente", que aparentemente precisan de la vigilancia eterna de instituciones correctivas: la amenaza de la mano dura de los militares educadores nacionales por excelencia. Son democracias cuyos miembros se asustan de la voz irritada de generales en retiro. Qué genera qué: una democracia de baja intensidad llega al desborde militar? O es el desborde militar el factor que resulta en una democracia débil de ciudadanos asustados? [\[14\]](#)

Cuál será el camino político de América Latina? Escuchando el discurso de los militares en retiro en el Brasil [\[15\]](#) y en Chile, se repite la argumentación de los militares golpistas de los años sesenta y setenta: subdesarrollo, dependencia, élites desinteresadas y cínicas, política caótica, huelgas, agitación foránea, educación precaria, y gobierno civil débil. Amenazas e intentos de golpe se dejaron sentir con cierta regularidad durante los años noventa del siglo pasado [\[16\]](#): en la Argentina y Venezuela hubo pronunciamientos e intentos de golpes al comienzo de aquella década. Los militares brasileños y chilenos manifestaron públicamente su descontento sobre asuntos como reformas constitucionales, políticas laborales o derechos humanos. En el Perú

se produjo un autogolpe en 1992 del presidente civil Fujimori, apoyado directamente por las Fuerzas Armadas. En 1993 fracasó un intento similar del presidente civil Serrano en Guatemala. Las Fuerzas Armadas tenían que contentarse con el nombramiento, por el Congreso, del procurador de los derechos humanos como nuevo presidente. En Venezuela el (ex-)militar y dos veces golpista Hugo Chávez fue elegido presidente. En Bolivia, el ex-dictador Hugo Banzer regresó como presidente, esta vez por medio de elecciones libres y democráticas. En diciembre de 1999, después de las elecciones presidenciales, su colega ex-gobernador de facto Ríos Montt se veía investido con la presidencia del congreso.

Incidentes en Ecuador y Paraguay parecen confirmar la continuidad de la intromisión militar en asuntos políticos nacionales. En Paraguay había en 1996 un intento de golpe contra el presidente Wasmosy, instigado por el general Lino Oviedo, quien - como teniente - personalmente había removido el viejo dictador Stroessner del palacio presidencial. En marzo de 1999 y en el otoño del mismo año, Lino Oviedo estaba relacionado con dos nuevos intentos de golpe. En Ecuador se acudía a mediados de la década de los noventa a los militares cuando el presidente, declarado inepto de gobernar por el parlamento, amenazaba con un conflicto constitucional. A finales de 1999 el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de dicho país expresó públicamente la inquietud castrense con la gestión presidencial. En enero de 2000 fue seguido por un pronunciamiento del Comando Conjunto, apoyando las exigencias de los pueblos indígenas. Parecían repetirse los "Gobiernos Revolucionarios de las Fuerzas Armadas" de Velasco en el Perú y de Torrijos en Panamá. Sin embargo, después de unos días de gran confusión política se resolvió la situación precaria por la renuncia del presidente y la sucesión constitucional por el vicepresidente.

Entre 1984 y 1994 el gasto militar en América Latina disminuyó con un ritmo anual de tres por

ciento. Durante el mismo período, se descendió la relación entre personal de las Fuerzas Armadas frente a la población total con un promedio anual de cinco por ciento. Esta reducción fue acompañado por una declinación de la influencia militar en sectores económicos estratégicos, como la minería, telecomunicaciones y energía. Solamente las Fuerzas Armadas de Colombia, Chile y Ecuador podían mantener acceso directo al tesoro público: en Colombia se inauguró en 1996 un impuesto especial de guerra contra la droga, las Fuerzas Armadas chilenas siguen recibiendo el diez por ciento de la venta del cobre, y los militares ecuatorianos pueden contar con el quince por ciento de las ventas del crudo nacional. [\[17\]](#) Las Fuerzas Armadas en Honduras llegaron a mantener una gran influencia económica: su poderosa caja de pensiones. De tal modo compraron al comienzo de la década de los noventa parte de la industria básica nacional cuando el gobierno decidió de vender las empresas para-estatales. Miembros del gabinete en aquellos primeros años comentaron que los sucesivos ministros de Defensa dedicaron más tiempo a la economía de las Instituciones Armadas que a asuntos castrenses. [\[18\]](#)

Parece que habrán dos caminos para las relaciones cívico-militares en la próxima década: la primera por el trayecto de consolidación de la transición hacia la democracia, la segunda por el recorrido de un nuevo itinerario, el del modelo del neo-populismo dictatorial, en el cual presidentes civiles con apoyo de las Fuerzas Armadas están gobernando bajo vigilancia formal de parlamentos degradados. El último camino aparenta ser seguido por el Perú y por Venezuela. El caso de Colombia es un caso aparte. La mayoría de los países latinoamericanos parece haber optado por el primer camino. En los dos siguientes párrafos aclararemos los dos caminos con más detalle.

Pauta I: Consolidación Democrática

Sin duda, en países como la Argentina, el Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá puede notarse una reducción considerable en

la presencia y el poder militar en asuntos de política nacional.

Casi inmediatamente después de su inauguración como presidente de Argentina, Alfonsín, primer presidente civil después de siete años de dictadura militar, tomó medidas para la desmovilización política de las Fuerzas Armadas. [\[19\]](#) Anuló inmediatamente la ley de auto-amnistía para el período entre 1973 y 1982, promulgada por la última junta antes de retirarse. Más aún, los ex-presidentes y anteriores miembros de la juntas de gobierno cívico-militares fueron acusados y condenados por tribunales civiles. Sin embargo, Alfonsín se vio obligado posteriormente de pactar con las Fuerzas Armadas. Confrontado con varias rebeliones militares llegó a perdonar los oficiales intermedios acusados de violaciones de los derechos humanos.

El Brasil pasó por una etapa de gradual transferencia de poder militar a los gobiernos civiles, finalizada durante los dos gobiernos de Cardoso. El primer presidente post-militar, Sarney, se dejó todavía "asesorar" por los seis Ministros da Casa, super-ministros instalados en el palacio, de los cuales cinco eran militares. [\[20\]](#) Su sucesor, Collor, redujo considerablemente la influencia de los servicios de inteligencia.. La transición brasileña era mucho más negociada que la argentina: en este país el gobierno militar tenía que salir de la escena política después de la pérdida de la guerra de las Malvinas. Sin embargo, democracia posmilitar brasileña, implementada y arraigándose no solamente de nivel federal, sino también de nivel de los estados y sobre todo de los municipios y barrios, redujo gradualmente la influencia militar en comparación con las décadas anteriores hasta la dimensión de "un tigre de papel". [\[21\]](#) Hunter y Castro proporcionan ejemplos de esa erosión de influencia: pérdida de iniciativas durante las negociaciones para el presupuesto, reducción de los gastos y de los programas militares, la distancia política de los estamentos militares

durante el proceso de Impeachment de Collor, la creación del "Comité de Personas Desaparecidas" [22], la sobriedad después de los cambios en las celebraciones públicas militares. [23] Talvez el resultado más impactante era la creación del ministerio de la Defensa bajo mando civil, eliminando la presencia de cinco ministros militares en el gabinete, dejando también desaparecer el funcionamiento del Comando Conjunto y canalizando el sistema de inteligencia y de seguridad del Estado hacia una agencia civil: la Oficina de Seguridad Institucional. [24] El rehacer militar, acompañado por despidas de altos militares, causó en el comienzo del año 2000 un descontento público de oficiales en retiro. Los oficiales en servicio activo recibieron un aumento de salario.

Chile también es el caso de una "salida controlada." [25] Los dos gobiernos democráticos después del referéndum que acabó con el proyecto político de Pinochet tenían que convivir, sin embargo, con el mismo ex-dictador, con el Consejo Nacional de Seguridad cuyos miembros militares tenían el mismo poder de voto como el presidente, y con otros legados institucionales del gobierno cívico-militar anterior. Chile regresó a la democracia con un "paquetóte institucional" de lazos e interrelaciones con los militares: Senadores no elegidos, un sistema electoral que favorecía considerablemente a los aliados del general, y requisitos bien elaborados para un cambio constitucional que acabaría con estos lazos. Adicionalmente, la institución militar entró en el régimen de los gobiernos democráticos protegida por una ley orgánica que impide el presidente de nombrar o de despedir la jefatura militar libremente. [26] En retrospectiva, mucho de la legislación pinochetista para regular la transición lenta, puede ser interpretada como auto-protectora. Cabe decir también que los diferentes tratados que constituyeron el MERCOSUR en el Cono Sur, dificultan también la entrada de

nuevos gobiernos de facto y el regreso de los gobiernos dictatoriales.

En Centroamérica y en México el peso militar se ha reducido considerablemente. En México, las Fuerzas Armadas se encontraron excluidos de la arena política desde los días del general-presidente Cárdenas. Como Benítez remarca finamente que, al igual al refrán popular mexicano, solamente había tres instituciones intocables: el Presidente, la Virgen de Guadalupe y el Ejército. Mutualmente, el presidente tiene un respeto a la institución castrense, que a su turno respeta "a capa y espada de ese poder civil" en un pacto tácito. [\[27\]](#) A partir del movimiento guerrillero en Chiapas en 1994, los gastos militares aumentaron bastante, y la presencia militar en público se hizo más visible: un tipo de "re-militarización" por la ocupación de altos cargos en cuerpos de seguridad pública y en misiones contra el narcotráfico y contra movimientos armados. [\[28\]](#) Sin embargo, el ejército mexicano es considerado ser principalmente el brazo armado del partido del poder, el PRI. Su experiencia militar es en dos campos: operaciones de contra-insurgencia, principalmente contra movimientos de guerrilla rural en los estados de Guerrero (años sesenta y setenta) y en Chiapas (actualmente), y operaciones de emergencia en situaciones de desastres físicos. Señales de una re-politización de las Fuerzas Armadas mexicanas no se ha recibido.

Los años noventa en Centroamérica mostraron en general una desmilitarización junto con una redemocratización de los países del istmo. Panama seguía tras un plebiscito el ejemplo de Costa Rica de deshacerse de la Institución Armada y de confiar la seguridad pública a un cuerpo civil del orden y seguridad pública. Nicaragua sigue esa tendencia a pesar de la resistencia inicial del Ejército Sandinista de reducir considerablemente su cuerpo de oficiales, su equipamiento y los soldados en servicio activo. La lucha por el poder entre la presidenta doña Violeta y la comandancia de las Fuerzas Armadas terminó en el

fortalecimiento del gobierno civil. Una fuerza policial civil está conformándose. [\[29\]](#) La década de los años noventa ha sido beneficiosa para el desarrollo democrático en Honduras. A pesar del peso económico de las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad hondureña, podía observarse una acomodación militar a la democracia implementada en 1980. En enero de 1999 fue nombrado el primer ministro civil de la Defensa. Este nombramiento finalizó una década de "normalización" por tres presidentes civiles (Callejas, Reina y Flores), de des-militarización del sector público, de la abolición del servicio militar obligatorio, la restitución del control civil sobre toda la policía. [\[30\]](#) En El Salvador posbélico se lanzaron varias reformas: la redimensionalización de las Fuerzas Armadas y la reducción paralela del cuerpo de oficiales y de los soldados, reformas de los cuerpos policiales y la creación de una nueva policía. El proceso está apoyado por la comunidad internacional y por Naciones Unidas. España proporcionó una asistencia técnica bilateral notable.

Guatemala pos-bélica está entrando en el proceso del control civil autónomo. A partir de 1985 el país atravesó paralelamente por tres procesos complicados: primero la transferencia del gobierno dictatorial hacia una democracia, pero vigilada estrechamente por los estamentos militares; segundo la transición de una guerra civil de treinta y seis años a un período de paz; y tercero la integración - por el momento tímido y lento - de las étnias excluidas y reprimidas durante la mayor parte del siglo veinte. Hasta la fecha la presencia militar sigue siendo fuerte, aunque lentamente disminuyendo. [\[31\]](#) De la reducción del cuerpo de oficiales y de la reestructuración del servicio de inteligencia - asuntos de los acuerdos de la paz - no resultó mucho. Sí fueron desarmados los integrantes de la anterior guerrilla y fueron desmantelados las Patrullas de Autodefensa Civil, cuyos miembros -casi exclusivamente indígenas - fueron estimados de tener 1,3 millones de

miembros. El presupuesto militar no sufrió de bajas sustantivas. El servicio de inteligencia se sabía encargar con nuevas tareas: ante el aumento de la violencia "común" en los primeros años después de la paz, y la ausencia de una nueva policía todavía siendo entrenada por la cooperación internacional española, sabían tanto las Fuerzas Armadas como el servicio de inteligencia ser encargadas con tareas de seguridad civil. "Fuerzas combinadas" patrullaban en los centros urbanos y rurales.

En el año 1999 el "movimiento del NO" - "NO" contra una combinación de los acuerdos de la paz y otros cambios administrativos - sabía ganar un voto negativo contra el plebiscito que el presidente Arzú - muy tarde - había organizado para ratificar los acuerdos. [\[32\]](#) El anteriormente anunciado desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial - cuerpo "obligatorio" de asesores presidenciales organizado por las Fuerzas Armadas y el servicio de inteligencia -, fue parado. El actual presidente Portillo asumió su presidencia mandando diez y nueve generales en retiro. Para evaluar si este gobierno adquirirá una autonomía decisiva frente a los militares guatemaltecos es -al momento de escribir esa contribución en junio de 2000 - demasiado temprano. Una comparación con el caso brasileño puede ser fructífero.

También en el caso de Guatemala fue el proceso de paz acompañado por Naciones Unidas y por países amigos. Naciones Unidas participó activamente en las negociaciones para la paz. [\[33\]](#) Naciones Unidas fue también en Nicaragua y en El Salvador encargada con el monitoreo y la verificación de los acuerdos. Mandó fuerzas del orden a los tres países, compuestas por contingentes de los países miembros. Sus esfuerzos en Guatemala fueron canalizados por MINUGUA, ente de monitoreo y de verificación que después de la paz seguía funcionando. La policía guatemalteca fue también reorganizada, con apoyo de la cooperación internacional española. [\[34\]](#)

En Guatemala, pero también en otros países de Centroamérica, el proceso de paz y el proceso de transición de gobiernos de facto hacia gobiernos democráticamente elegidos ha sido acompañado por un lento fortalecimiento de la sociedad civil. La Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala, apoyado por el Arzobispado, tomó una cierta fuerza como "parlamento paralelo" durante los últimos años de las negociaciones para la paz.

Centroamérica fue sorprendida y tal vez invadida por un sinnúmero de ONG después de la paz y las transiciones políticas. [\[35\]](#) Sin embargo, como Crespo mantiene, las instituciones democráticas como los parlamentos y los partidos políticos pasaron también por un proceso de aprendizaje. [\[36\]](#) En algunos países - como El Salvador - puede observarse un cambio de la orientación político-partidaria en la dirección del centro: desde la configuración de partidos de extrema derecha y de extrema izquierda de los años ochenta y el comienzo de los años noventa puede notarse la conformación de dos bloques considerablemente más moderados: de centro-derecha y de centro-izquierda. También la política estatal de intervenir en la problemática social aparece rendir efecto en el sentido de menguar los efectos directos de la extrema pobreza y de contribuir a la gobernabilidad más transparente. [\[37\]](#)

Pauta II: Nuevos Modelos de Gobiernos Duros

De los países con una pauta de desarrollo diferente mencionamos aquí dos ejemplos: el caso de Colombia y el caso del Perú. Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez sigue muchas de las tendencias que se vislumbran en el Perú de Fujimori. Por razones de claridad preferimos contrastar en ese párrafo Colombia con el Perú. [\[38\]](#)

Colombia tiene a primera vista una democracia formal intacta, con legislación progresista, con elecciones libres, descentralización de gobierno avanzada con capacidad local de planificación y de

ejecución. Una sociedad civil amplia y no completamente desorganizada fortalece esas capacidades locales. El ministro de la Defensa es un civil, ya durante dos períodos de gobierno. Sin embargo, la violencia diaria en el país es tan grande, tan "normal", que la muerte y el terror aparentan a acompañar la vida diaria. Se estima que el número de víctimas muertas por matanzas entre 1980 y 1995 subió los 300.000. [\[39\]](#)

"Actores armados" de diferente índole contribuyen a esa "sociedad de miedo": las Fuerzas Armadas, los diferentes grupos guerrilleros, los paramilitares, las fuerzas para-policíacas y la policía privada, los escuadrones de la muerte, las bandas armadas de los narcotraficantes, los contingentes de la "criminalidad común", los jóvenes sicarios, etc. Son proclives a actividades acompañadas con el uso de violencia tan extrema que Pécaut introdujo el concepto de la "banalidad de la violencia". [\[40\]](#)

Por supuesto: Colombia goza de un gobierno democrático, pero: Qué significado real tiene la democracia si los gobiernos local y nacional no pueden controlar los actores armados que regulan el uso indiscriminado de la violencia contra los ciudadanos colombianos?

En el Perú, al otro lado, son actores controlados por el gobierno nacional quienes dosifican un tipo de violencia de baja intensidad, a veces con fuerza ostentosa, pero normalmente con aplicación sutil. [\[41\]](#) En un cierto sentido, la década política de los años noventa en el Perú es el producto conjunto de un proceso de desintegración de los años ochenta. Los efectos combinados de la hiperinflación; de la pauperización y exclusión social de grandes masas de la población - indígena y urbana - ; y de la guerra civil, básicamente contra las columnas guerrilleras de Sendero Luminoso contribuyeron a la elección sorpresiva de un novato político en 1990: Fujimori, influido por una juventud dura en los barrios populares en el centro de Lima y figurando como el "representante verdadero de los pobres y excluidos: 'Alguien como tú'." Disponiendo de una minoría en el parlamento

pero contando de un pregonado pragmatismo, encontró rápidamente aliados y asesores poco escrupulosos, de los cuales el ex-capitán de las Fuerzas Armadas y (ex-)abogado de los narcotraficantes Montesinos llegó a ser el más notorio. Montesinos llegó al puesto de asesor de materia de seguridad y de lucha contra-insurgente. Desempeña desde 1990 el puesto de "Presidente del Consejo Estratégico del Estado" y controla de tal modo directamente el SIN.[\[42\]](#) Debido a una política sistemática de co-optación de oficiales "mansos" y de despida de oficiales "institucionalistas", Fujimori y Montesinos rápidamente sabían controlar la cúpula castrense de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.[\[43\]](#) Después del el nombramiento de un general de confianza, Hermoza, se formó un tipo de triunvirado, compuesto por Fujimori, Montesinos y Hermoza, que controlaba todos los asuntos de Estado entre 1991 y 1998.[\[44\]](#) A partir de 1998, Fujimori, asistido en la oscuridad por su asesor en materia de seguridad e inteligencia, comenzó a comportarse más directamente como un "dictador civil", apoyandose cada vez más directamente en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de inteligencia y de seguridad, contando con un parlamento dócil, y controlando las asociaciones populares, utilizando casi abiertamente métodos fraudulentos para manipular la voz popular y las elecciones democráticas.

Fujimori no había podido llegar tan lejos sin una considerable popularidad, del cual gozaba durante la mayoría de los años de su primer término y los primeros años de su segundo término presidencial. La popularidad alcanzó su cumbre en 1992, cuando en abril de este año lanzó un autogolpe, apoyado plenamente por las Fuerzas Armadas. Fue el momento que el gabinete de Fujimori, sin asesoramiento de la banca internacional y al estilo criollo, había terminado con el fenómeno de la hiperinflación, aunque a costo de empobrecimiento de gran parte de la clase trabajadora y clase media urbana. Llegaría en pocos meses el momento de la captura

de Abimael Gúzman, temido líder de Sendero Luminoso. A partir de este momento se desintegraría el movimiento guerrillero. [\[45\]](#) La popularidad del presidente era inmensa: alrededor de ochenta por ciento de la población apoyaba a Fujimori, y solamente bajo presión internacional era que convocó elecciones para un Congreso Constituyente. Ganar elecciones es algo como adquirir una línea de crédito electoral a mediano plazo; sin embargo, Fujimori comenzó a considerar sus victorias electorales como la entrega de un patrimonio. Después de ganar las elecciones parlamentarias en 1992 - con márgenes pequeños - y presidenciales en 1995 - con una amplia mayoría de sesenta y cuatro por ciento - comenzó a utilizar las Fuerzas Armadas como la mano derecha y al SIN como mano izquierda del régimen.

Los mecanismos de control están basados en cinco ejes: el control sobre las Fuerzas Armadas; el control sobre los servicios de seguridad y de inteligencia; el control sobre los programas de lucha contra la pobreza; el control sobre el sistema jurídico; y el control sobre los medios de comunicación de masa.

El control sobre las Fuerzas Armadas no aconteció sin protestas. En 1993 había un grupo de oficiales que intentó un "contra-golpe constitucional". Sin embargo, el intento fracasó y los líderes fueron arrestados. Oficiales opositores entregaron durante todo el período de Fujimori informes clandestinos a la prensa. Fotocopias de actividades de escuadrones de muerte cercanos al asesor presidencial fueron facilitados a políticos, periodistas e investigadores. [\[46\]](#) Cartas anónimas seguían circulando en Lima. Dentro del ejército se formaron grupos de oposición entre los oficiales capitanes, mayores y teniente-coroneles. [\[47\]](#) El presidente mantenía una mano libre en asuntos castrenses: la legislación contra-insurgente de los primeros años de guerra seguían en vigencia, y el control sobre los gastos militares y sobre el presupuesto de la defensa por el Congreso es legalmente ausente. Últimamente es

el presidente quien manda, no los generales. Por lo tanto comportamiento sumiso de altos oficiales comenzó a ser de costumbre. [\[48\]](#)

El SIN, un servicio modesto hasta finales de los años ochenta, se expandió rápidamente bajo el mando de Montesinos. Desde la captura de Guzmán en 1992 las actividades nucleares del sistema de inteligencia comenzaron a ser - paralelamente al monitoreo de personas y movimientos insurgentes - la vigilancia de personas e instituciones opositores: periodistas, académicos, oficiales de las Fuerzas Armadas, propietarios de los medios de comunicación, líderes del movimiento laboral, etc. Fujimori comenzó a tener la costumbre de nombrar en puestos claves (ex-)miembros de la comunidad de seguridad y de inteligencia: en el gabinete, en la presidencia del congreso, en los tribunales constitucionales y electorales. Junto a las actividades de investigación se formaron cuerpos de acción y de fuerza y escuadrones de la muerte dentro del o alrededor del SIN. Como en Europa del Este durante las décadas de gobiernos controlados, se formó en el Perú una complicada y extensa red de informantes, soplones, pequeños traidores y chantajistas. El sector público está intensamente vigilado, en parte por oficiales del SIN, en parte por vigilantes y colega-informantes. Los "comités de defensa" y las "rondas campesinas" proporcionan información en las zonas rurales. Los "comités locales" y "zonales de desarrollo", los "comités transitorios rurales", las "cajas rurales", hasta las ONG rurales prestan servicios. [\[49\]](#) Los "clubes de madres" y los "comités de vaso de leche" en las barriadas limeñas y de otros centros urbanos informan regularmente sobre sujetos sospechosos. Y por supuesto puede utilizarse siempre los servicios de los "arrepentidos", los 5.000 ex-guerrilleros senderistas quienes se entregaron a las autoridades con sus armas, fueron premiados con la libertad condicional y son disponibles para "servicios especiales". [\[50\]](#)

Al nivel de las organizaciones populares cabe decir que los centrales laborales efectivamente

desaparecieron en los años ochenta y noventa. Durante los años setenta habían tenido un fuerte peso político, pero a partir de la crisis económica que se originó a finales de los años setenta y cuyos efectos se dejan sentir hasta la fecha de hoy, gran parte de la economía nacional se veía afectada por la informalidad. Como en ningún otro país de América Latina la informalización trastornó el panorama económico y social: a mediados de los años noventa se estimaba que el sesenta y cuatro por ciento de la población económicamente activa limeña sobrevivía en la economía informal. Todos los indicadores de pobreza y de exclusión entre 1985 y 1995 oscilaron entre el cincuenta y el cincuenta y cinco por ciento. El salario real dentro del sector privado bajó de cien en 1985 hasta 59 en 1995. El porcentaje de subempleados de la PEA limeña fue estimada mayor que ochenta por ciento. Dos tercios de la población de la tercera edad sobrevive sin beneficio alguno del sistema de seguridad social. Etcétera. [\[51\]](#) Programas gubernamentales y de los donantes de la cooperación internacional: como FONCODES (empleo), el programa del vaso de leche, PRONAA (cocinas populares), el programa de desayunos escolares, el programa de crédito rural, el programa de caminos rurales, etcétera proveen el ingreso y la comida diaria de treinta hasta cuarenta por ciento de la población peruana. El trabajo dentro del sector público y privado es generalmente temporal, por contratos de sesenta hasta noventa días. Tener trabajo es recibir un favor. Trabajo e ingreso nunca es una seguridad. Los programas contra la pobreza sirven un objetivo doble: alimentos en cambio de información sobre compañeros y vecinos, ingreso por votos durante las elecciones. Trabajo e ingreso son pagados con lealdad, información, votos y obediencia.

El control sobre la justicia fue facilitada también por la legislación anti-subversiva. Las leyes de contra-insurgencia del comienzo de los años noventa posibilitaron la transferencia de casos "terroristas" y "subversivas" a la

jurisdicción de tribunales militares. También fue aceptado como medida de emergencia la introducción - al estilo colombiano - de tribunales anónimos: la institución de "jueces sin rostro", que funcionó entre 1992 y 1997.[\[52\]](#) La intimidación de jueces independientes, la intervención del SIN, la factual impunidad de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas, los comandantes de los escuadrones de la muerte, algunos narcotraficantes y asesores gubernamentales fue altamente criticado por observadores extranjeros.[\[53\]](#) Noticias no complacientes a la opinión oficial del gobierno fueron razón de intervenir en los medios de comunicación masiva. El caso más conocido fue la intervención en el Canal Dos de Televisión, una emisora privada cuyo dueño - Ivcher - había permitido la emisión del programa Contrapunto, que reveló los ingresos sorprendentemente altos de Montesinos y anteriormente publicó sobre espionaje telefónico durante las elecciones presidenciales en 1995 y algunos casos de tortura y matanzas por miembros del SIN.[\[54\]](#) Periódicos y semanarios demasiado críticos recibieron mensajes especiales.[\[55\]](#) Gran parte de la prensa, la radio y la televisión está caracterizada por su alto grado de auto-censura.

Es interesante reflexionar sobre la lógica del modelo peruano y talvez venezolano y sobre las posibilidades de ser imitado o adaptado. Uno de los ejes centrales es el liderazgo de presidentes altamente autoritarios e inmensamente inclinados al pragmatismo despiadado. La popularidad presidencial, verdadera o manipulada, se basa entre otros en la relación populista con los pobres , las masas populares y los excluidos de la sociedad. La desconfianza de estas categorías frente a las instituciones legales y parlamentarios está nutrida por la repetida argumentación presidencial sobre la "corrupción de los demás políticos", "los obstáculos de la legislación vigente" y "la incompetencia y ineptitud de los magistrados". El presidente legitima así su menosprecio frente a leyes, reglas

y procedimientos y está inclinado de restringir la capacidad legislativa del parlamento y la capacidad operativa del sector público Otro eje es la sumisión de las Fuerzas Armadas cuyas instituciones se acomodaron para ser remodeladas como un tipo de "servicio de ejecución" del presidente, asumiendo tareas de ejecución de proyectos de desarrollo y de propaganda política en servicio del presidente. Como compensación funciona un sistema de co-optación interna dentro de las Fuerzas Armadas. Se brinda amplia libertad para las cúpulas superiores de enriquecerse. Programas de combate de la pobreza y de desarrollo local son utilizados para garantizar la popularidad presidencial a un mínimo necesario dentro de la población votante. Ayuda también para crear un sistema de clientela política y establecer un mecanismo de control y de información local. Mientras tanto, se crea en la oscuridad un vacío para que los servicios de seguridad y de inteligencia operen con amplia libertad como policía y juez oculta del régimen. El sistema jurídico tiene que ser moldeado y restringido en su autonomía. En casos sensitivos, una transferencia hacia la justicia militar facilita el resultado deseado. Control sobre o auto-censura de parte de los medios de comunicación masiva complementan el modelo de dominación.

Prioridades y Políticas en la Época Posdictatorial

Una democracia consolidada y duradera se basa en el orden y la ley, en la estabilidad del orden económico, social y político, en el funcionamiento de las instituciones claves del gobierno elegido y en el respeto por la voz popular. De este punto de vista es interesante tener que concluir que muchos de los regímenes duros, de las dictaduras militares y cívico-militares en América Latina de los años de la Guerra Fría fueron regímenes de la "seguridad nacional" y combatieron los "enemigos internos". Estos enemigos eran "comunistas" y "terroristas" que afectarían el orden "occidental", "cristiano", "libre" y

"democrático". El paradojo complicado de la necesidad de regímenes duros y autoritarias para proteger la nación y redefinir el desarrollo nacional creó a su turno regímenes militares que a la larga resultaron ser los verdaderos "enemigos internos", siendo obstáculos para un desarrollo armónico, equitativo y duradero. Fueron creadores de "sociedades de miedo".

Para prevenir la existencia de sociedades de miedo, de democracias de baja intensidad, para consolidar la transición a democracias sólidas y para prevenir el incremento de nuevos modelos de gobiernos duros, los gobernantes tienen que estar definidos y coherentes frente a sus Fuerzas Armadas, sus fuerzas civiles del orden público, los servicios de seguridad y de inteligencia, y a "actores armados" que operan fuera de legitimidad de la violencia controlada del Estado. En las paginas restantes nos dedicaremos únicamente a la política frente a las Fuerzas Armadas. [\[56\]](#)

Definir la misión de las Fuerzas Armadas es distinguir claramente entre tareas básicas y auto-atribuidas. América Latina no tiene enemigos externos y una explosión repentina de guerras externas o de conflictos internos es improbable. Igualmente la emergencia de una nueva generación de guerrilleros es una posibilidad remota. Al otro lado, el problema de la ciudadanía de segunda clase, asociada a los grandes contingentes de la pobreza extrema y de la exclusión social incrementará la posibilidad de los conflictos étnicos. Los tres movimientos guerrilleros de los años noventa: en las guerras civiles en Guatemala y en el Perú, y también la guerrilla en Chiapas, México, tienen claros rasgos de hostilidad étnica. El coctel cuyos ingredientes son la desesperación, la frustración y el odio a través de líneas étnicas, religiosas y de la pobreza ha dado la oportunidad que las Fuerzas Armadas en países grandes de otros continentes - en Indonesia, en Nigeria, en Turkía, en Algeria por ejemplo - se han auto-atribuido de manera permanente el papel de arbitro social, político y hasta religioso,

interviniendo en materia de fundamentalismo islamita y secularidad del Estado, en materia de seguridad pública y de desarrollo nacional. [\[57\]](#)

Encontrar el balance fino entre el orden civil y militar es un requisito necesario para el funcionamiento eficaz de las instituciones públicas que regulan la democracia. Decidir sobre el desarrollo nacional, eliminar las causas de la pobreza, de la exclusión social y del racismo son asuntos de gobiernos elegidos y de sus instrumentos de ejecución: el sector público. Sin la existencia de un sector público civil, un sistema legal civil y una policía civil estable, eficiente y coherente, el problema de la pesada interferencia militar en la política sigue permaneciendo. Teniendo instituciones militares que desempeñan un papel pasivo y neutra en la arena política requiere la formación de ejército, una marina y una fuerza aérea en relación directa con las obligaciones directamente castrenses de defender el territorio nacional contra los enemigos externos y para contrarrestar a los desastres físicos. Misiones tan vagas como "proteger los intereses nacionales" abre el camino a golpistas y juntas por auto-definición de una interferencia legal de las Instituciones Armadas en la política nacional. Tales misiones admiten tácitamente una inferioridad de los gobiernos civiles en época de crisis y funcionan como invitación abierta a oficiales generales de ser juez y arbitro del destino nacional. Deberían desaparecer de la Constitución y de las leyes orgánicas las referencias a estas misiones. Un tercer requerimiento es la eliminación legal de artículos y de procedimientos jurídicos que enfatizan la posibilidad de "inmunidad de facto". Otro elemento es la eliminación de privilegios militares que separan los miembros de las Instituciones Armadas de la sociedad como tal: desde "Bancos del Ejército" hasta supermercados y playas privadas de las Fuerzas Armadas. Las obligaciones militares de la defensa deberían claramente diferenciadas del mantenimiento del

orden civil, asumiendo a la vez que la ley funciona para todos los ciudadanos, con o sin uniforme. La inteligencia militar debería ser limitada a asuntos estrictamente militares: un aparato omnipotente y omnipresente de Seguridad del Estado, manejado por los estamentos militares es el núcleo en el esquema de un Estado policial. Se requiere también una acertada modestia en la definición de las misiones y responsabilidades de institutos de enseñanza y entrenamiento cívico-militares como la ESG, el CAEM y el Centro ESTNA. La sociedad civil gana más con un sector público competente cuyos tecnócratas son entrenados en instituciones civiles que con un liderazgo cuyos miembros fueron acostumbrados de pensar en soluciones militares.

La intromisión militar en tareas policiales de policía o el uso de fuerzas especiales en operaciones anti-motines contra la población civil contribuirá únicamente para estigmatizar a las Fuerzas Armadas como instrumento represivo. Involucrar los militares en operaciones anti-narcóticos llevará consigo el riesgo de corrupción institucional. Poner unidades especiales de las Fuerzas Armadas al servicio de brigadas anti-narcóticos sofocará las instituciones civiles como los cuerpos de la policía urbana y rural y otras agencias especializadas con su propio esprit de corps. Poner énfasis exagerado en la acción militar para actividades de desarrollo local o la protección del medio ambiente de ninguna manera contribuye al gasto público en armamento y equipo, o en entrenamiento especializado. Las únicas nuevas misiones tanto prestigiosas como aceptables para profesionales militares parecen ubicadas en el ambiente de operaciones de paz y de monitoreo de conflictos resueltos. Las operaciones multilaterales, al servicio de Naciones Unidas, en el exterior podrían reducir la dependencia marcada de la influencia estadounidense de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Pero, de nuevo: las tareas de la paz en otros países, justificarían

los esfuerzos financieros nacionales en entrena-miento y en equipo?

El problema básico es, últimamente, el fortalecimiento de la sociedad civil, un proceso lento que necesariamente va acompañado por un "buen gobierno" competente, un parlamento respetado y respetable, un sistema jurídico eficiente e imparcial, y un sector público competente y políticamente neutro. Eso requiere mayor inversión en instituciones de entrenamiento para los estamentos superiores civiles. Eso requiere una policía urbana y rural bien organizada y suficientemente bien pagada con su propio area legítimo de responsabilidad. Eso requiere nuevas agencias competentes que puedan operar con éxito contra la narco-economía, la narco-violencia y la criminalidad organizada. La presencia fuerte y marcada de autoridades civiles, apoyadas por presupuestos razonables, en regiones deprimidas y subdesarrolladas es crucial. Y, sobre todo, es vital de diseñar una campaña deliberada de largo plazo contra la pobreza masiva y la ciudadanía de segunda categoría basada en criterios étnicos y características marginalizantes. Cuando se hallen cumplidas las condiciones mínimas para un bienestar social, la estabilidad de las instituciones democráticas y los demás pilares de la sociedad civil será tal, que la hegemonía militar en la política nacional sea un asunto del pasado.

domingo, 18 de junio de 2000 (23:26 h.)

Bibliografía

Agüero, Felipe. "Dictatorship, Institutionalization and Exit: The Chilean Military after Augusto Pinochet." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. *Political Armies. Military, Politics, and Nation Building in Comparative Perspective*---. London: Zed, 2001 (en prensa).

A paso lento. Informe anual sobre la región andina. Lima: Comisión Andina de Juristas, 1999.

Arnson, Cynthia J., Dinorah Azpuru, Demetrio Cojtí Cuxil, Carroll Ríos de Rodríguez, Bernardo Arévalo

de León y Edelberto Torres-Rivas. La consulta popular y el futuro del proceso de paz en Guatemala. Guatemala/Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars/The Latin American Program, Working Papers Series - Documento de Trabajo #243), diciembre de 1999.

Arnson, Cynthia J. "Conclusion: Lessons Learned in Comparative Perspective." en Cynthia J. Arnson, ed. Comparative Peace Processes in Latin America. Washington/Stanford: Woodrow Wilson Center Press/Stanford University Press, 1999, pp. 447-463.

Arévalo de León, Bernardo. Sobre arenas movedizas: Sociedad, estado y ejército en Guatemala, 1997. Guatemala: FLACSO, 1998.

Arévalo de León, Bernardo, Francisco Rojas Aravena y Carlos Sojo. La nueva agenda de seguridad en Centroamérica. Guatemala: FLACSO/Paz y Seguridad en las Américas, 1998.

Barber, William F. y Neale Ronning. Internal Security and Military Power. Counterinsurgency and Civic Action in Latin America. Ohio: Ohio State University Press for the Mershon Center for Education in National Security, 1966.

Bases para la consideración de la cuestión militar en Guatemala. Hacia una política de seguridad para la democracia. Guatemala: PNUD-UNOPS/FLACSO/War Torn Societies Project/IGEDEP, diciembre de 1999.

Benítez Manaut, Raúl. Sovereignty, Foreign Policy, and National Security in Mexico, 1821 - 1989." en Hal Klepak, ed. Natural Allies? Canadian and Mexican Perspectives on National Security. Carlton: Carlton University Press, 1996, pp. 57-90.

Benítez Manaut, Raúl. "Las Fuerzas Armadas mexicanas a fin de siglo." Ponencia presentada en el XXII Congreso de la Latin American Studies Association, Miami, 16 - 18 de marzo de 2000.

Bétancourt, Dario y Martha L. García. Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia

social de la mafia colombiana (1965-1992). Bogotá: T/M Editores, 1994.

Biekart, Kees. *The Politics of Civil Society Building. European Private Aid Agencies and Democratic Transition in Central America.* Amsterdam: Transnational Institute, 1999.

Borgh, Chris van der. "Decision-Making and Participation in Poverty Alleviation Programmes in Post-War Chalatenango, El Salvador." *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 63, diciembre de 1997, pp. 49-66.

Borgh, Chris van der. *Wederopbouw in Chalatenango, El Salvador. Ontwikkelingsorganisaties in een naoorlogse maatschappij.* Amsterdam: Thela Thesis Publishers, 1999.

Cameron, Maxwell A. "Elections in a Hybrid Regime: Civil-Military Relations and Caesarism in Peru." Ponencia presentada en el XXII Congreso de la Latin American Studies Association, Miami, 16 - 18 de marzo de 2000.

Castro, Celso. "The Military and Politics in Brazil." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. *Political Armies. Military, Politics, and Nation Building in Comparative Perspective--*. London: Zed, 2001 (en prensa).

Chernick, Marc. "Negotiating Peace amid Multiple Forms of Violence: The Protracted Search for a Settlement to the Armed Conflicts in Colombia." en Cynthia J. Arnson, ed. *Comparative Peace Processes in Latin America.* Washington/Stanford: Woodrow Wilson Center Press/Stanford University Press, 1999, pp. 159-196.

Constable, Pamela y Arturo Valenzuela. *A Nation of Enemies. Chile under Pinochet.* Nueva York y Londres: W. W. Norton, 1991.

Cuadra Lira, Elvira. "(In)seguridad ciudadana en Nicaragua. Un análisis de la policía." en Cuadra Lira, Elvira, Andrés Pérez Baltodano y Angel Saldomando, eds. *Orden social y gobernabilidad en Nicaragua, 1990- 1996.* Managua: CRIES, 1998, pp. 71-103.

Cuadra Lira, Elvira, Andrés Pérez Baltodano y Angel Saldomando, eds. Orden social y gobernabilidad en Nicaragua, 1990- 1996. Managua: CRIES, 1998.

D'Araujo, Maria Celina, Gláucio Ary Dillon Soares y Celso Castro, eds. Visões do golpe. A memoria militar sobre 1964. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994a.

D'Araujo, Maria Celina, Gláucio Ary Dillon Soares y Celso Castro, eds. Os anos de chumbo. A memoria militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994b.

D'Araujo, Maria Celina y Celso Castro, eds. Ernesto Geisel. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.

Democracia en la encrucijada. Informe anual sobre la región andina. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2000.

Downes, Richard. "Building New Security Relationships in the Americas: The Critical Next Steps." en Donald E. Schulz, ed. The Role of the Armed Forces in the Americas: Civil-Military Relations for the First Century. Washington: Strategic Studies Institute, 1998, pp. 13-30.

Drake, Paul V. Y Iván Jaksic, eds. The Struggle for Democracy in Chile. Lincoln y Londres: University of Nebraska Press, 1995 (edición revisada).

Figueroa, Adolfo, Teófilo Altamirano y Denis Sulmont. Social Exclusion and Inequality in Peru. Ginebra: Instituto Internacional de Estudios Laborales, 1996.

Figueroa, Adolfo. "Distribución de ingresos en el Perú." en John Crabtree y Jim Thomas, eds. El Perú de Fujimori, 1990-1998. Lima: Universidad del Pacífico/IEP (Perú Problema #25), pp. 219-254.

García, Prudencio. El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las Juntas Militares. Madrid: Alianza Editorial, 1995.

Garrido, Luis Javier. El partido de la revolución institucionalizada. La formación del Nuevo Estado en México. Mexico: Siglo XXI, 1982.

Glebbeek, Marie-Louise. "The Police Reform and the Peace Process in Guatemala: The Fifth Promotion of the New Civilian Police into Action." Ponencia presentada en el XXII Congreso de la Latin American Studies Association, Miami, 16 - 18 de marzo de 2000.

Guerrero, Javier. Los años de olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991.

Hayes, Robert A. The Armed Nation: The Brazilian Corporate Mystique. Temple: Arizona State University/Center for Latin American Studies, 1989.

Huggins, Martha K. Political Policing. The United States and Latin America. Durban y Londres: Duke University Press, 1998.--

Hunter, Wendy. Eroding Military Influence in Brazil. Politicians against Soldiers. Chapel Hill: The University of North Carolina, 1997.

Ibiapiana Lima, Helio. "Vivemos 1963?" Revista do Clube Militar 77 (381), julio de 1999, pp. 4-5.

"In Huancayo. Testimony of Pacification." Comando en Acción #27, VIII, 1999, pp. 58-69.

Koonings, Kees. "Shadows of Violence and Political Transition in Brazil: From Military Rule to Democratic Government." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror en América Latina. Londres: Zed Books, 1999, pp. 197-234.

Koonings, Kees. "The Military and the Dictatorship in Brazil. Factionalism and Political Orientations of the Armed Forces, 1984-1985." en Patricio Silva, ed. The Soldier and the State in South America. Essays in Civil-Military Relations. Basingstoke: MacMillan, 2000 (en prensa).

Koonings, Kees y Dirk Kruijt. "Military Politics and the Mission of Nation Building." en Kees

Koonings y Dirk Kruijt, eds. *Political Armies. Military, Politics, and Nation Building in Comparative Perspective--*. London: Zed, 2001 (en prensa).

Kruijt, Dirk. *Revolution by Decree. Peru 1968-1975*. Amsterdam: Thela Publishers, 1994.

Kruijt, Dirk. "Exercises in State Terrorism: The Counter-Insurgency Campaigns in Guatemala and Peru." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. *Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror en América Latina*. Londres: Zed Books, 1999, pp. 33-62.

Kruijt, Dirk. *Baile de disfraces. Ensayos sobre viejos y nuevos actores en la sociedad militar y la sociedad civil de América Latina*. San José: FLACSO, 2000.

Kruijt, Dirk y Kees Koonings. "Introduction: Violence and Fear in Latin America." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. *Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror en América Latina*. Londres: Zed Books, 1999, pp. 1-30.

Kruijt, Dirk y Maria del Pilar Tello. *From a Military Reformist to a Civilian Dictator: Peruvian Military Politics from the 1960s to the Present.*" en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. *Political Armies. Military, Politics, and Nation Building in Comparative Perspective--*. London: Zed, 2001 (en prensa).

Lara, Patricia. *Siembra vientos y recogerás tempestades. La historia del M-19, sus protagonistas y sus destinos*. Bogotá: Planeta, 1991.

Lehmann, D. y A. Bebbington. "NGOs, the State, and the Development Process: The Dilemmas of Institutionalization." en Menno Vellinga, ed. *The Changing Role of the State in Latin America*. Boulder: Westview Press, 1998, pp. 251-270.

Lozano, Wilfredo, ed. *Cambio político en el Caribe. Escenarios de la Posguerra Fría: Cuba*,

Haití y República Dominicana. Caracas: Nueva Sociedad, 1998.

Mauceri, Philip. "Unchecked Power: The Presidency under Fujimori and Beyond." Ponencia presentada en el XXII Congreso de la Latin American Studies Association, Miami, 16 - 18 de marzo de 2000.

Memoria 1998. Academia de policía "Walter Mendoza Martínez". Managua: Policía Nacional de la República de Nicaragua, 1999.

McSherry, J. Patrice. Incomplete Transition. Military Power and Democracy in Argentina. Houndmills y Londres: MacMillan, 1997.

Obando, Enrique. "Fujimori y las Fuerzas Armadas." en John Crabtree y Jim Thomas, eds. El Perú de Fujimori, 1990-1998. Lima: Universidad del Pacífico/IEP (Perú Problema #25), pp. 353-378.

Palmer, David Scott. "Direct Democracy at the Grassroots in Peru: 'Informal Politics' in Peru." Ponencia presentada en el XXII Congreso de la Latin American Studies Association, Miami, 16 - 18 de marzo de 2000.

Pécaut, Daniel. "From the Banality of Violence to Real Terror: The Case of Colombia." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror en América Latina. Londres: Zed Books, 1999, pp. 141-169.

Pion-Berlin, David. The Ideology of State Terror. Economic Doctrine and State Repression in Argentina and Peru. Boulder: Lynne Rienner, 1989.

Rescuing Police Reform: A Challenge for the New Guatemalan Government. Washington: Washington Office on Latin America, noviembre de 1999.

Rojas Bolaños, Manuel y Carlos Sojo, eds. El malestar con la política. Partidos y élites en Costa Rica. San José: FLACSO, 1995.

Roquié, Alain. The Military and the State in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1989.

- Rosada-Granados, Héctor. Soldados en el poder. Proyecto militar en Guatemala, 1944-1990. Amsterdam: Thela/Thesis Publishers (Latin America Series #15), 1999.
- Salazar, Alonso J. Mujeres de fuego. Medellín: Corporación Fuego, 1993a.
- Salazar, Alonso J. No nacimos pa' semilla. La cultura de las bandas juveniles de Medellín. Bogotá: CINEP, 1993b.
- Salazar, Alonso J. y Ana Maria Jaramillo. Medellín. Las subculturas del narcotráfico. Bogotá: CINEP, 1992.
- Salomon, Leticia. Las relaciones civiles/miliares en Honduras: Balance y perspectivas. Tegucigalpa: CEDOH, 1999.
- Schirmer, Jennifer. The Guatemalan Military Project. A Violence Called Democracy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.
- Schirmer, Jennifer. "The Guatemalan Politico-Military Project." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. Political Armies. Military, Politics, and Nation Building in Comparative Perspective--. London: Zed, 2001 (en prensa).
- Silva, Patricio. "Collective Memories, Fears and Consensus: The Political Psychology of the Chilean Democratic Transition". en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror en América Latina. Londres: Zed Books, 1999, pp. 171-196.
- Silva, Patricio. The Soldier and the State in South America. Essays in Civil-Military Relations. Basingstoke: MacMillan, 2000 (en prensa).
- Smith, H. European Foreign Policy and Central America. Londres: MacMillan, 1995.
- Soares, Gláucio Ary Dillon y Marina Celina D' Araujo, eds. 21 anos de regime militar. Balanços e perspectivas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1994.

- Soares, Gláucio Ary Dillon y Celso Castro, eds. A volta aos quartéis. A memoria militar sobre a abertura. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.
- Sojo, Carlos. Reforma económica, estado y sociedad en Centroamérica. San José: FLACSO, 1998.
- Sojo, Carlos. Democrácias con Fracturas. Gobernabilidad, reforma económica y transición en Centroamérica. San José: FLACSO, 1999.
- Starn, Orín. Nightwatch. The Politics of Protest in the Andes. Durham y Londres: Duke University Press, 1999.
- Stepan, Alfred. The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 1971.
- Stern, Steve J., ed. Shining and other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995. Durham y Londres: Duke University Press, 1998.
- Tapia, Carlos. Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y su final. Lima: IEP, 1997.
- Tedesco, Laura. "The Argentine Armed Forces under President Alfonsín." European Review of Latin American and Caribbean Studies 61, December 1996, pp. 21-37.
- Torres-Rivas, Edelberto. Epilogue: Notes on Terror, Fear and Democracy." en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror en América Latina. Londres: Zed Books, 1999, pp. 285-300.
- Vellinga, Menno, ed. The Changing Role of the State in Latin America. Boulder: Westview Press, 1998.
- Vickers, George R. "Renegotiating Internal Security: The Lessons of Central America." en Cynthia J. Arnson, ed. Comparative Peace Processes in Latin America. Washington/Stanford: Woodrow Wilson Center Press/Stanford University Press, 1999, pp. 389-413.

-Youngers, Coletta. Deconstructing Democracy. Peru under President Fujimori. Washington: Washington Office on Latin America, febrero de 2000.

Zagorsky, Paul W. Democracy vs. National Security. Civil-Military Relations in Latin America. Boulder y Londres: Lynne Rienner Publishers, 1992.

Zelaya, Raquel, Arnoldo Noriega, Jean Arnault, Manuel Salazar Tetzagüic, Carmen Urízar y Arnoldo Ortiz Moscoso. El proceso de paz en Guatemala: Logros y desafíos. Guatemala/Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars/The Latin American Program, abril de 1999.

[1] Véase Kruijt y Koonings (1999) , Kruijt (1999), Koonings (1999), Pécaut (1999) y Torres-Rivas (1999) para un análisis detallado.

[2] Véase Roquié (1989), Silva (2000) y Zagorsky (1992).

[3] Véase Hayes (1989: 224-25).

[4] La expresión es de Stepan (1971).

[5] Los gobiernos militares revolucionarios en México y en el Perú se construyeron dos modelos de alianza cívico-militares diferentes. Los partidos contruidos por Calles y por Cárdenas como "sucesores institucionales de la revolución" incorporaron "sectores" tales como empresarios, trabajadores, campesinos y militares. Cárdenas disminuyó explícitamente el peso del "sector militar" dentro de la PRI. Cuando en los años cincuenta la presidencia llegó a ser transferido de generales a licenciados, el PRI sin embargo seguía manteniendo un estilo autoritario y excluyente. Los "Gobiernos Revolucionarios de las Fuerzas Armadas" en el Perú enfatizaron el "Binomio Pueblo - Fuerzas Armadas" y excluyeron, en su ideología anti-oligárquica, las élites económicos en favor de los sindicatos y partidos políticos del centro (DC) y de la izquierda (PC). Véase Garrido (1982) y Kruijt (1994).

[6] Schirmer (1998: 248). La traducción es mía.

[\[7\]](#) Véase Arévalo (1998) y Rosada-Granados (1999).

[\[8\]](#) Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional.

[\[9\]](#) Centro de Altos Estudios Militares

[\[10\]](#) Escola de Guerra.

[\[11\]](#) Véase Arnson (1999), McCleary (1999) y Vickers (1999).

[\[12\]](#) Durante la Guerra Fría también los EEUU apoyaron en actividades de "limpieza política". Para estudios de casos, sobre todo en el Brasil, véase Huggins (1998: 99 y sgts.).

[\[13\]](#) En detalle descritos por Barber y Ronning (1966).

[\[14\]](#) Véase aquí la argumentación en el documento Bases para la consideración de la cuestión militar en Guatemala (1999: 4-29).

[\[15\]](#) Por ejemplo Ibiapiana Lima (1999). General Ibiapiana era el presidente del Clube Militar en el Brasil en 1999.

[\[16\]](#) Seguimos aquí la argumentación de Koonings y Kruijt (2001).

[\[17\]](#) Véase Downes (1998: 17).

[\[18\]](#) Entrevista del autor con el ingeniero Alonso Valenzuela, Ministro Asesor del Presidente, el día 5 de octubre de 1993.

[\[19\]](#) Véase Pion-Berlin (1989) y Tedesco (1996). Véase también García (1995) y McSherry (1997).

[\[20\]](#) Véase Koonings (1999). Sobre las facciones dentro de las Fuerzas Armadas véase también Koonings (2000). Para un balance de los gobiernos militares, véase los cinco tomos relacionados de D'Araujo, Soares y Castro (1994a, 1994b), Soares y D'Araujo, Soares (1994), D'Araujo y Castro (1995), y D'Araujo y Castro (1997). Castro (2001) analiza la transición de 1985 hasta 2000 en detalle.

[\[21\]](#) La expresión es de Hunter (1997: 23).

[\[22\]](#) Comissão dos Desaparecidos.

[\[23\]](#) Hunter (1997) y Castro (2001).

[\[24\]](#) Gabinete de Segurança Institucional.

[\[25\]](#) Véase Constable y Valenzuela (1991), Drake y Jaksic (1995) y Silva (1999). Agüero (2001) describe el "proyecto militar" de Pinochet, inclusive la larga negociación al retiro.

[\[26\]](#) Véase Agüero (2001).

[\[27\]](#) Benítez Manaut (2000)

[\[28\]](#) Véase Benítez Manaut (1996).

[\[29\]](#) Véase al respecto Cuadra Lira (1998) y en general sobre orden social y gobernabilidad en Nicaragua: Cuadra Lira, Pérez Baltodano y Saldomando (1998). Véase también Memoria 1998. Academia de policía "Walter Mendoza Martínez" (1999).

[\[30\]](#) Véase Salomon (1999).

[\[31\]](#) Véase para un análisis Arévalo (1998), Arévalo, Rojas y Sojo (1998) y Schirmer (2001).

[\[32\]](#) Sobre la consulta popular en Guatemala y sus consecuencias, y sobre el papel de los diferentes actores sociales -las Fuerzas Armadas, el sector privado - véase Arnson, Azpuru, Cojtí, Ríos, Arévalo y Torres-Rivas (1999).

[\[33\]](#) Véase al respecto Zelaya,, Noriega, Arnault, Salazar Tetzagüic, Urizar y Ortiz (1999).

[\[34\]](#) Véase al respecto Rescuing Police Reform (1999). Un análisis interesante de la actualidad (junio de 2000) se encuentra en Glebbeek (2000).

[\[35\]](#) Véase Biekart (1999), Van der Borgh (1997; 1999), Lehmann y Bebbington (1998), Smith (1995) y Vellinga (1998).

[\[36\]](#) Véase Crespo (1995: 20). Véase también Font y Gomá (1995). La mayoría de las contribuciones en la edición de Alcántara y Crespo (1995) brinda una argumentación semejante.

[\[37\]](#) Véase al respecto Sojo (1999) y además Rojas y Sojo (1995) y Sojo (1998).

[\[38\]](#) Dejamos al lado la situación en el Caribe. Para un análisis reciente, véase Lozano (1998).

[39] Mucho de este párrafo es tomado de Pécaut (1999). Véase también Betancourt y García (1994), Guerrero (1991), Lara (1991), Salazar (1993a, 1993b), Salazar y Jaramillo (1992) y Torres Arias (1995).

[40] Pécaut (1999: 141).

[41] Véase Kruijt y Tello (2001) para un análisis detallado. También utilizamos Youngers (2000) y las ponencias de Cameron (2000), Mauceri (2000) y Palmer (2000).

[42] "Sistema de Inteligencia", al cual pertenecen los servicios de inteligencia del ejército, de la marina, de las fuerzas aéreas, de las fuerzas policionales y los agrupamientos paramilitares asociados.

[43] Utilizando también la legislación especial contra-insurgente, de los cuales la Ley de la situación militar (1991) resultó ser la más importante, Fujimori podía disponer del nuevo derecho presidencial de nombrar y de despedir a todos los oficiales de rango superior. La ley también proporcionaba la posibilidad que oficiales comandantes podían seguir siendo oficial en servicio activo, a pesar de haber llegado a la edad de pasar al retiro. De tal modo el presidente podía nombrar y mantener en su puesto al general Hermoza como comandante del ejército.

[44] En 1998, tras un conflicto entre Montesinos y Hermoza, fue despedido el general.

[45] Véase Tapia (1997). Los restos del movimiento continuarían su lucha en forma de bandas regionales. El líder sucesor de Guzmán, Feliciano, sería capturado en junio de 1999 (Véase In Huancayo, 1999). Durante las operaciones contra-insurgentes las Fuerzas Armadas utilizaron los servicios de las rondas campesinas, comités de autodefensa. El número de los ronderos entre 1900 y 1994 subió de 50.000 hasta 400.000 Véase también Starn (1999) y Stern (1998)

[46] La presencia de escuadrones dentro del SIN durante dos matanzas, una en Barrios Altos, un

lugar cerca del palacio presidencial, y otra en la Universidad pedagógica La Cantuta en los suburbios de Lima, fue hecho pública por el general Robles, que después tenía que buscar asilo político fuera del Perú.

[47] Obando (2000: 309).

[48] Como el general Howard Rodríguez, comandante de la Región Militar I -la frontera con Ecuador -, quien a la sorpresa del público apareció en la televisión repartiendo almanaques con la foto del presidente en escuelas secundarias en Piura. Fujimori elogió el general.

[49] Palmer (2000: 9-10), quien realizó trabajo de campo en Ayacucho, región inicial senderista, comenta que casi todas las ONG locales mantienen lazos con el gobierno central en la capital.

[50] Llamados así por la Ley de arrepentimiento de mayo de 1992; véase Tapia (1997: 80-81).

[51] Véase Figueroa, Altamirano y Sulmont, 1996 y Figueroa (2000).

[52] Del cual el miembro de la Corte Suprema, el Dr. Carlos Jiusti comentaba en una entrevista con el autor: "Cuando comienzas con los jueces sin rostro, llegues de repente a una justicia sin rostro. Y cuando transfieres sistemáticamente casos sensitivos a los tribunales militares, comienzas a legalizar la tortura y la violación de los derechos humanos." El Dr. Jiusti era uno de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru durante la captura de la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996. Fue el único civil que encontró la muerte durante la liberación de los rehenes por un comando especial de las Fuerzas Armadas.

[53] Entre otros por Amnesty International y Americas Watch. Véase también A paso lento (1999) y Democracia en la encrucijada (2000).

[54] Véase Mauceri (2000: 6-8). Ivcher perdió su nacionalidad y su propiedad y el Canal Dos fue posteriormente transferido al Comando Conjunto.

Actualmente es el Canal vocero del presidente y de las Fuerzas Armadas.

[\[55\]](#) El semanario Sí, altamente crítico durante los años ochenta y los primeros años de la década de los noventa, fue silenciado tras la violación de la hija pre-adolescente, aparentemente por dos oficiales del SIN.

[\[56\]](#) Véase Kruijt (2000: 39-43) para los siguiente argumentación.

[\[57\]](#) Véase las diferentes contribuciones en Koonings y Kruijt (2001).